

Educar para la paz, un desafío que Colombia debe asumir

Óscar Sánchez*

El gobierno colombiano ha decidido negociar un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del mundo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. Después de cinco años de negociaciones entre una fase secreta y una pública, el 23 de junio pasado se cerró el acuerdo para la dejación de armas, y antes de que termine el año 2016 se espera firmar el acuerdo definitivo, ratificarlo mediante un plebiscito y concentrar a los combatientes para iniciar su desmovilización, desarme y reintegración.

El país ha celebrado la noticia, pero el escepticismo es enorme. Y las razones muy serias. Las estructuras de exclusión social, cultural y económica, la debilidad del Estado, sobre todo cuando se trata de garantizar a los débiles sus derechos, y la naturalización de la violencia y la ilegalidad en la cultura, hacen que la probabilidad de que nos reinventemos la guerra sea muy elevada. De hecho, en el pasado se han firmado muchos tratados de paz y se han incumplido por completo, o su cumplimiento parcial no ha logrado evitar que las causas de la violencia persistan.

La educación es un ejemplo crudo de esa realidad. Aunque no es demasiado difícil entender que la ausencia de oportunidades para los jóvenes está en la base de la reproducción de la violencia, la “fábrica de guerreros” está bien abierta. Más de 400.000 guerrilleros, paramilitares y sobre todo soldados profesionales, han engrosado un contingente de chicos (y en menor medida chicas) que como carne de cañón han librado la guerra durante los últimos 50 años. Su perfil es muy preciso y bien estudiado: desde los 11 o 12 años esos niños campesinos desertaron de un sistema escolar rural con poco acceso y menos sentido, y casi sin excepción han sufrido maltrato en sus familias. Buscan una oportunidad de trabajo desde niños, y ser combatientes rasos se convierte en su proyecto de vida, medio queriendo, medio sin querer, como dice un excelente cómico filósofo.

De los combatientes rasos del Estado y de los grupos armados ilegales, prácticamente ninguno terminó la educación media y muy pocos pasaron de la primaria. En Colombia la cobertura general de educación secundaria no es especialmente baja. Pero esos guerreros vienen exactamente en las zonas geográficas donde sí lo es. Hablamos de una décima parte de los municipios de Colombia, y más precisamente de las veredas más alejadas de esos municipios. Es decir, que en una pequeña fracción del país, desde el punto de vista demográfico (vastos territorios con poca densidad) se concentra toda la fuerza de trabajo para la guerra.



Allá los docentes no llegan a ocupar sus plazas, o cuando llegan se trata en su mayoría de chicos poco preparados y sin vocación. Justo allí el transporte y la alimentación escolar son casi inexistentes. La pedagogía es muy precaria, y los modelos que el Ministerio de Educación ofrece poco consultan la realidad, sobre todo a partir del sexto grado. Las escuelas no tienen agua ni energía. El sistema de protección a los menores es muy precario, y la orientación psicosocial no existe ni en las escuelas ni en la promoción social comunitaria. Tampoco hay mayores oportunidades ni formación sociolaboral, deportiva o cultural. Lo que más llega hasta estas zonas es fuerza pública (policía y ejército), fuerza de grupos armados ilegales con alguna idea política (guerrillas y paramilitares), o fuerza de grupos criminales que necesitan jóvenes para sus negocios de narcotráfico, contrabando o extracción ilegal de recursos naturales.

Y entre tanto, el país urbano sigue concentrando las políticas sociales, incluyendo las políticas educativas y de protección a la infancia. Aunque sólo algunas ciudades reducen los riesgos de que una parte de los chicos terminen en una pandilla juvenil en la que correrían la misma suerte de los guerreros rurales. En especial, hay ciudades a donde se han trasladado las personas desplazadas por el conflicto o por la pobreza, que han duplicado o triplicado su población juvenil en una o dos décadas, y que tampoco tienen respuesta a los riesgos de sus jóvenes. Una educación urbana altamente segregada hace que grupos de colegios específicos en zonas marginales muy violentas sean los que más reprobación, deserción y violencia presentan. Además son colegios asediados por las pandillas que alimentan los capos del narcotráfico.

La paz pasa por una nueva concepción de la seguridad y la justicia que no se ve, pero de la cual se habla con frecuencia. Pasa por una reforma de las estructuras de tenencia y uso de la tierra de las cuales se habla mucho, aunque sus resultados en políticas efectivas son muy precarios. Pero de la transformación educativa, para crear una verdadera generación de paz, se habla muy poco en concreto y se hace todavía menos.

Es una lástima que Colombia no se haya tomado hasta ahora en serio el postulado inicial de la carta de la Unesco, que afirma que dado que las guerras nacen en la mente de los hombres, es allí donde deben erigirse los baluartes de la paz.

La esperanza está en las comunidades organizadas, donde líderes sociales de base, maestros y maestras y jóvenes inquietos muestran todos los días un compromiso firme para cambiar la realidad. Esos seres no son la mayoría, pero si son muchos y son maravillosos. En centros urbanos muy golpeados por el dolor y el estigma es conmovedor ver el heroísmo, la creatividad y la alegría de muchas madres, profesores y estudiantes. Y en lo rural hay líderes del magisterio y de las asociaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes que muestran una gran madurez y que han resistido la guerra y ahora le apuestan con una fuerza descomunal a la paz. Y en especial, grupos

culturales y de productores agrícolas formados por niñas, niños y adolescentes que hacen que salten las lágrimas, un poco por la esperanza que generan y otro tanto por la rabia que da ver con la escasez material en la que trabajan.

En todo el país, de la mano de esos liderazgos, hay que hacer educación socioemocional, ciudadana y para la reconciliación. Y en las zonas rurales más apartadas, un modelo de fortalecimiento de escuelas con participación comunitaria y una pedagogía que respete el contexto y confíe en los chicos y sus maestras y maestros.

En lo rural la clave está en apoyar las escuelas más apartadas. Pero no tanto para que el sector educativo parezca una excepción en comunidades con muchas carencias, sin para que las escuelas sean el epicentro de la reflexión sobre la realidad y el motor de cambio social en cada vereda, corregimiento y región donde la guerra ha dejado secuelas dolorosas y ahora se requiere hacer que la esperanza despegue. Las matemáticas y el lenguaje tomarán fuerza si primero lo hace el entusiasmo para que los jóvenes sean la prueba viva de que la paz es posible. De modo que partiendo de la ciudadanía, la identidad, el perdón, la memoria, la conciencia sobre los derechos humanos, la participación y el cuidado de la naturaleza y en especial del cuerpo y la mente de las personas, llegaremos a las competencias básicas y a las laborales y científicas. E incluso ese es el camino para conquistar la competitividad y la sofisticación que tanto trasnochan a algunos expertos en educación.

Pero Colombia requiere que cada poderoso local o nacional, empresario, político, sindicalista o intelectual mire a los ojos a algunos de los dos millones de personas con edades entre los cero y los veinte años que viven en las zonas rurales críticas, o al millón de chicos en riesgo de deserción escolar en las zonas urbanas duras, y al verlo se pregunte: ¿estamos poniendo nuestro poder al servicio de la primera prioridad que tenemos? Si esa prioridad estuviera clara, estaríamos invirtiendo unos dos millones de pesos (700 dólares) adicionales al año por cada uno de esos chicos en las zonas rurales de los 150 municipios más afectados por el conflicto armado. Y si estuviera claro, hace rato habríamos entendido que el conocimiento y la formación del carácter son el medio más efectivo para la estabilidad institucional y el desempeño económico, pero ante todo, son el único camino posible para dar libertad a las personas y hacer que nos valoremos unas a otras. Y habríamos entendido el costo prohibitivo para todos de mantener una sociedad donde la buena educación es un privilegio.



FEDERACIÓN INTERNACIONAL
Fe y Alegría

Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social

Hace un par de años un grupo de organizaciones del cual forma parte Fe y Alegría decidimos emprender juntas el camino para hacer del trabajo pendiente aquí descrito una realidad. Se creó entonces el Programa Nacional de Educación para la Paz –EDUCAPAZ–, que se concentra en la educación rural y la educación ciudadana, y con el que hemos comenzado a aliarnos con algunas comunidades y escuelas para hacer un trabajo demostrativo y definimos una estrategia de incidencia en las políticas de educación del país y sus territorios.

La idea es clara. Su necesidad también. Hay pocos recursos materiales, y el Estado no parece tener la capacidad ni la cohesión que se requieren. Pero hay aliados institucionales, jóvenes, docentes y líderes comunitarios con ganas de paz. EDUCAPAZ nace con lo más importante a su favor.

***Coordinador Nacional de EDUCAPAZ, exsecretario de educación de Bogotá, columnista de www.ElTiempo.com @OscarG_Sanchez**